

especial para El Norte, edición del 3 de mayo de 1992

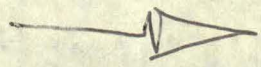
Guadalajara: en espera de la verdad

miguel ángel granados chapa

Carlos Rivera Aceves es el nuevo gobernador de Jalisco. Se supone que lo es, interinamente, sólo durante el año que presuntamente durará la licencia de Guillermo Cosío Vidaurri. Haría mal negocio, sin embargo, quien apostara a que éste volverá a ser huésped principal del palacio de gobierno. Se ha ido para siempre. Y es difícil hallar quién considere eso como un infortunio para los jaliscienses y, por ende, derrame una lágrima.

Los autores teatrales, o de novelas, hallarían en Cosío Vidaurri un personaje capaz de llenar, con la intensidad de su drama, escenas enteras, páginas profusas. Resume en la suya la biografía de una ambición que se diluye al ser colmada. Quiso, toda su vida, ser gobernador de Jalisco. Y se indigestó cuando lo fue. Parecía víctima de la misma condena padecida por los *made himself men*, que trabajan duramente su vida entera para poder comer aquello que ansiaron estérilmente en su infancia pobre, y cuando puede hacerlo, la dispepsia se lo impide.

Cosío Vidaurri acarició desde muy joven la idea de gobernar a los jaliscienses. Era un deseo tan fuertemente enraizado en su conciencia, que no dudó en apartarse del grupo político en que había surgido a la vida pública, el encabezado en la Universidad de Guadalajara por Carlos Ramírez Ladewig, cuando advirtió que había allí competencia excesiva. Puso su casa aparte, hace más de veinte años, en 1970, consiguió ser alcalde de Guadalajara. Parecía estar en la antesala de la gubernatura. Pero el cargo fue



huidizo ante él, y en posiciones diversas vio correr el tiempo, hasta que al fin su sueño se realizó. Pero era demasiado tarde. Como lo diría el Presidente Salinas en diagnóstico terrible, e inequívocamente dirigido al gobernador de Jalisco, se preparó para una sociedad que ya no existe.

Denotó esa incapacidad para adaptarse a las circunstancias vigentes hoy, hasta el último instante. Su carta de renuncia --lo es, aunque formalmente pida licencia al Congreso local-- es un monumento a la insensibilidad política. Si un historiador, dentro de cien años, contara con sólo es de documento para narrar lo que en abril de 1992 ocurría en Guadalajara, no podría asegurar que hubo un estallido provocador de cientos de víctimas, de lesiones a miles más, de la destrucción de muchos patrimonios. Porque Cosío Vidaurri fue omiso al respecto. No atribuye su caída a lo que todo el mundo sabe, su incapacidad para ser solidario con sus paisanos, antes y después del estallido. La atribuye a maniobras para deestabilizar su administración, perceptibles, dijo, desde hace dos meses. Al formular esa referencia, aportó una nueva prueba, entre muchas, de las razones por las cuales debía haberse marchado de la gubernatura hace tiempo. Hace dos meses, ante el clima de inseguridad creciente en la capital de jalisco, y también en otras ciudades de la entidad, cientos de mujeres, de todas las clases sociales pero con ostensible presencia de esposas de empresarios muy prósperos y visibles, marcharon por las calles de Guadalajara, y publicaron en la prensa de esa capital una interpelación al gobierno. En vez de expresar adhesión a las preocupaciones de esas ciudadanas, y en vez de responder a sus reclamos, el gobernador se preguntó, en público,



sobre los intereses que movían, en su contra, a esas manifestantes. Concentrar en torno suyo la angustia de gobernar revelaba que los problemas sociales, el del desvalimiento de la sociedad ante el crimen, espontáneo y organizado, eran nada comparados con el riesgo que su posición podía correr.

Pero nos hemos demorado en exceso hablando del ex gobernador, cuando que lo importante en Guadalajara es la tragedia allí vivida, sus consecuencias locales específicas, y las secuelas de diversa índole que ha generado y todavía suscitará en adelante. Estamos lejos de conocer en sus términos exactos la magnitud del daño provocado por los estallidos del 22 de abril, pues la arbitrariedad e incuria del gobernador saliente aplastaron bajo la eficacia de las máquinas los restos de personas y bienes que hubiera podido completar el inventario de lo perdido. Y sobre todo, estamos en ayunas respecto de las causas verdaderas del desastre, cuyo conocimiento es imprescindible para poner remedio a la situación de claro y presente peligro en que viven los tapatíos todos, no sólo los habitantes de las colonias próximas a la comarca destrozada. El informe de la Procuraduría General de la República, único documento oficial hasta ahora difundido, traza un perfil general del problema con el que se puede estar de acuerdo, hasta que llega el momento de descender a los pormenores. No es claro, en absoluto, cómo entró en el drenaje la gasolina que se fugó sin que nadie durante semanas se percatara de ello, del poliducto Salamanca-Guadalajara. Tal como lo narra el documento, parece cosa de magia, y la cosa debe haber ocurrido con arreglo a leyes físicas y no las del pensamiento mítico. Tampoco son claras las razones para se haya consignado a personas



de responsabilidad dudosa y se haya virtualmente exonerado --o al menos no se les inculpó en un informe esperado con ansia por todo el mundo-- a quienes de acuerdo con la ley no se condujeron como se esperaba de ellos. No hay referencia alguna a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, aunque si la hay a la ley de protección ambiental cuya aplicación debe ser hecha por esa dependencia. Y cuando se acusa al presidente municipal, igualmente defenestrado, Enrique Dau, de no haber ordenado la evacuación de la zona, se soslaya que una orden de esa magnitud tiene que ser apoyada con el uso de la fuerza pública, y que en los municipios donde radica el gobernador, dicha fuerza pública no depende de los ayuntamientos sino del titular del Poder Ejecutivo estatal. Del informe ministerial se desprendió asimismo, aunque no en forma cabal, la admisión de que las primeras imputaciones, a una empresa aceitera, era en el mejor de los casos un error, y en el peor parte de una maniobra de distracción para evitar que la atención pública recayera sobre Femex. Si el ingeniero José Morales Doria, director de esa empresa, hubiera rehuido sus responsabilidades y se hubiera ocultado, receloso de la fabricación de culpas de que pudiera ser víctima, aquella maniobra habría prosperado. La atajó no sólo con su clara conciencia ética, sino también con una capacidad de persuasión que, por contraste, está a faltar entre los titulares de poderes públicos. Con todo, en vista de que se trata de un proceso que apenas se inicia, y de que una enjuiciamiento penal de esa anturaleza tiene como propósito encontrar precisamente la verdad, hemos de esperar que esas causas se expresen, a fin de encontrar el medio de que sus trágicas consecuencias no se



repitan.

Eso es, en mi opinión, lo que verdaderamente importa: evitar que en plazo más o menos corto estemos lamentando una nueva tragedia, nacida de irresponsabilidades y codicinas. Hoy la gente está alerta, adquirió de pronto una conciencia tan viva que puede convertirse en sicosis respecto de los riesgos que sufren los habitantes de las grandes alomeraciones urbanas. Y como resultado de esa concientización seremos testigos de una movilización social cada vez más frecuente, protagonizada por grupos y corrientes amalgamadas por ese poderoso cemento que es el temor. Y si el gobierno no se coloca en posición de entender la legitimidad de este reclamo en pos de la seguridad urbana, entraremos en una época de desencuentros entre la autoridad y los gobernados, que pueden permanecer en el nivel de las meras fricciones, desgastantes de suyo pero no explosivas, pero pueden también convertirse en detonantes de otras insatisfacciones más antiguas y profundas. O también nuevas y superficiales: la marcha de la economía en los niveles ciudadanos dista de tener la brillantez con que presentan sus informes los responsables de las grandes cifras. Las ventas al menudeo de artículos indispensables, como medicamentos, han disminuido notablemente en el primer trimestre de 1992, y esa recesión mucho indica.

Será ingenuo quien suponga que el costo político de la tragedia de Guadalajara se pagó con la caída del gobernador y el alcalde y la consignación de funcionarios medios de Pemex y otras agencias gubernamentales. El verdadero modo de enfrentar los desafíos que de hoy en adelante constituirán el clima de normalidad social en que deberemos desenvolvernos consiste en una



clara obediencia de las autoridades a los reclamos legítimos de la sociedad. Cosío se fue no sólo porque omisiones como las suyas prohiaron una descomunal tragedia, sino porque se rehusó a admitir que así había sido, incapacidad surgida de su carencia de entrenamiento en el arte de rendir cuentas a los ciudadanos.

—